

Juan Agulló

## Venezuela allende las elecciones

Hugo Chávez fue reelegido, el pasado 3 de diciembre, con el 62% de los votos: un 6% más que en su primera elección hace ocho años. La Revolución Bolivariana, símbolo del post-neoliberalismo en América Latina, se consolida a partir del gasto social. Quedan por definir, no obstante, los términos de su propia viabilidad –económica e institucional– a largo plazo.

La oposición venezolana progresa: en 1998 –año de la llegada de Chávez al poder– obtuvo dos millones y medio de votos; el pasado 3 de diciembre, más de cuatro. Pequeño detalle: durante el mismo periodo el *chavismo* creció aún más, duplicando sus apoyos. Triplicó así el diferencial de sufragios entre ambas opciones, que ahora se acerca a los tres millones de votos. En dicho contexto la abstención, antaño mayoritaria, recula hasta la tercera posición.

No cabe duda de que una gran transformación –al menos electoral– está en marcha en Venezuela. Un tercio de sus ciudadanos censados se ha movilizado electoralmente en los últimos ocho años: suficiente como para desmantelar primero –con tan solo un millón de votos más que en 1993– la ahora definida como IV República y para consolidar posteriormente –con la mencionada tercera parte del censo– la V República, el régimen actual.

El gasto social parece haber jugado un papel clave. En solo un sexenio ha sido incrementado en cerca de un 14% llegando a suponer más del 40% del gasto público total <[www.sisov.mpd.gov.ve](http://www.sisov.mpd.gov.ve)>. Resultado tangible: durante el mismo lapso la incidencia de la pobreza ha descendido en

aproximadamente un 10% <[www.ine.gov.ve](http://www.ine.gov.ve)> ubicándose a niveles parecidos a los de comienzos de la década de los 1990 (el primer “Plan de ajuste estructural” fue aplicado en 1989).

La articulación Estado-sociedad pareciera estar volviendo a constituir –lo veremos a lo largo del presente artículo– una realidad en la Venezuela contemporánea. Sigue sin ocurrir algo parecido, sin embargo, en relación con el territorio. Para muestra, un locuaz botón: a pesar de tratarse del séptimo país más biodiverso del mundo apenas está –marginamente– incluido en uno de los grandes *corredores biológicos* globales <[www.terralingua.org](http://www.terralingua.org)>.

La desigual distribución geográfica de su población (el 90% de sus 26 millones de habitantes reside en el 21% del territorio) no es ajena a dicha circunstancia: el capital circulante resulta clave para explotar la biodiversidad. Algo parecido ocurre con el resto de –abundantes– recursos con los que cuenta un país que, por si fuera poco, alberga una fuerza de trabajo poco cualificada y un mercado –comparativamente– pequeño, de poder adquisitivo no muy elevado.

En este panorama sombrío sólo hay una entrampada excepción: el petróleo. Supone, desde 1961, más del 50% de los ingresos por exportaciones (actualmente, el 80%) y no menos de la mitad de los ingresos fiscales del Estado. Hace ya casi medio siglo que, como consecuencia de ello, la soberanía nacional se ha convertido en una variable del bien –fluctuante y no renovable– del que subsiste un país que, de paso, es su quinto productor mundial.

Una de las *ideas-fuerza* de la campaña electoral *chavista* de 1998 fue invertir este estado de cosas (proponiendo reinversión y diversificación para recuperar independencia). Desde entonces los niveles de producción de crudo se mantienen prácticamente inalterados; las actividades no

petroleras no terminan de arrancar y el Estado sigue siendo el gran sostén de la actividad económica. ¿Qué le hace ganar, entonces, tantos votos a Chávez?

### Genealogía de una solidez

El *chavismo* realmente existente no constituye –contra lo que suele tenderse a pensar– un corpus político acabado. Se trata, por encima de sus propias inspiraciones ideológicas (“más jacobinas que bolivarianas”, según Georges Lomné) de una praxis surgida en plena crisis del neoliberalismo en América Latina. Su naturaleza –y por ende, su actual solidez– sólo puede ser explicada a partir de una relación dialéctica con el entorno.

Hugo Chávez –figura carismática de la Revolución Bolivariana– no constituye, en efecto, ni producto de un exitoso marketing ni de una súbita enajenación mental colectiva sino de un hondo malestar social. Son distinguibles, en dicho sentimiento, elementos compartidos con otros países del área y uno, el desencadenante, relativamente específico de la realidad local: el brusco empobrecimiento socioeconómico padecido por el país entre 1983 y 2003.

Durante el reseñado periodo, Venezuela, no solo acumuló un escuálido crecimiento económico (10%: casi una tercera parte que en los veinte años precedentes) sino que padeció, en paralelo, escalofriantes incrementos de la inflación (3.800%) y de la pobreza (617%). Se esfumó así, en apenas dos décadas, casi la mitad de lo acumulado durante el –dorado– periodo posterior a la Segunda Guerra mundial.

Es cierto que los procesos de “ajuste estructural” –impuestos, en América Latina, por los organismos financieros multilaterales– provocaron tendencias parecidas en casi todos los países del área. En ninguno de ellos se alcanzaron, sin embar-

go, los niveles que en Venezuela. Salvo en el caso excepcional de Cuba hay que ir geográficamente lejos para encontrar situaciones similares: ex Unión Soviética, ex Yugoslavia, ex Zaire...

Si la crisis venezolana alcanzó proporciones bélicas es porque estuvo asociada a una depresión mundial en los precios del petróleo –que en 1998 llegaron a cotizar por debajo de los 12 dólares por barril: hoy día rondan los 60–. Hay que recordar, en ese sentido, que la IV República había sido fundada –en 1958– sobre la base de una creencia ciega en las posibilidades de crecimiento –ergo, se pensaba entonces, de desarrollo– que propiciaba el petróleo.

Ése es el motivo por el que las bases estructurales de la sociedad venezolana permanecieron prácticamente inalteradas desde el periodo oligárquico. Cosméticos como la urbanización; las infraestructuras o la alternancia contribuyeron a modelar, durante décadas, el mito de una *Venezuelan Exception* que terminó disolviéndose cual azúcarillo –como recuerda con insistencia Steve Ellner– a partir del Caracazo, en 1989.

Dicho acontecimiento, primero, y los dos intentos de golpe de Estado, en 1992, pusieron de manifiesto la incapacidad del sistema para responder políticamente a un descontento social creciente. Las rémoras estructurales pesaron, sin duda, pero el neoliberalismo contribuyó a enviciar el círculo: la disminución de la presión fiscal sobre las cada vez más parcas rentas petroleras terminó por malherir los mecanismos clientelistas de control e integración social.

Todo ello tuvo una incidencia directa en la gobernabilidad: Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos –lo recuerda Margarita López Maya– había llegado a tener, durante los años 1970, un PIB como el de Italia. Precisamente por eso, sus ciudadanos –beneficiarios, antaño, de ciertos niveles de bienes-

tar pero sobre todo, de cierta capacidad de consumo— vivieron mal la debacle: un sentimiento de frustración nutrió un malestar interclasista.

El primer intento del sistema por (re)definir los términos de su propia viabilidad lo protagonizó, en el referido contexto y a partir de una curiosa dislocación, el ex presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979): discurso anti-neoliberal, praxis monetarista. El Caracazo y los dos intentos de golpe —producto de una incesante dualidad creativa— frenaron su estrategia: Pérez, escogido como salvador, terminó siendo depuesto por el Congreso, acusado de corrupción.

La crisis amplificó sus términos. La descomposición del sistema fue cada vez más evidente: en las presidenciales de 1993 votaron menos venezolanos que nunca. Además, los dos partidos mayoritarios se derrumbaron propiciando un nuevo intento de (re)definición del sistema: Rafael Caldera, el nuevo presidente, trató de establecer una relación —sobre todo, política— con la exclusión que sentara las bases de nuevos mecanismos de integración.

Pero las condiciones objetivas se lo impidieron: el enjambre de partidos no tradicionales que apoyaban a su Gobierno (de orientación, teóricamente, progresista) no era ajeno a la crisis de representatividad propiciada por la pérdida de valor de lo político amén de, por supuesto, por el proceso de dualización socioeconómica en marcha. Al igual que ocurrió posteriormente en otros países del entorno, el interlocutor escogido no fue pues el correcto...

Como consecuencia de ello el eficiente *lobby* neoliberal terminó imponiéndose: en 1997 el Gobierno adoptó un “programa de ajuste” que coincidió con una de las cotizaciones más bajas del petróleo de todo el siglo xx. El margen de maniobra política del ejecutivo se vio así reducido a su mínima expresión mientras que —en

paralelo— la voluntad social de ruptura comenzó a crecer sobre la base de lo que Ernesto Laclau define como “lógica de la equivalencia”.

No se trató, en todo caso, del único sentimiento colectivo que circuló por aquel entonces: las clases medias urbanas, atemorizadas por la presión de los sectores populares y por lo que consideraban inhibición de los grupos dirigentes, comenzaron a desarrollar una inaudita querencia por el orden. El carismático militar ex golpista Hugo Chávez fue quien, en dicho contexto, mejor armonizó los deseos de los unos y los temores de los otros.

El Chávez primigenio no fue en efecto —como suele tenderse a pensar— abrumadoramente sostenido por los sectores más desfavorecidos de la sociedad venezolana. Sólo una proporción relativamente minoritaria de los mismos se sobrepuso a la lógica excluyente —de ribetes censitarios— de la que eran víctima. Su inédita participación electoral fue, sin embargo —y esto es lo que suele inducir a error— fundamental para desnivelar la balanza en 1998.

A partir de entonces Hugo Chávez —consciente del potencial electoral de dichos sectores y comprometido, al mismo tiempo, con un proyecto transformador— emprendió la que está resultando la (re)definición más exitosa del sistema político venezolano en los últimos tiempos. Ya no se trata de una iniciativa de integración sistémica —como con Pérez— o del establecimiento de una relación —pretendidamente— dialéctica con la exclusión —como con Caldera—.

El *chavismo* trata de reconstruir el tejido social a partir de políticas económicas redistributivas aplicadas por un Estado intervencionista que se legitima desde el pasado (Bolívar) y a partir de la periferia del sistema. Su heterodoxia le acarrea problemas agravados por una circunstancia que evidencia lo complejo del caso: ganar elec-

ciones no equivale a conquistar el poder; en Venezuela, hay que controlar el petróleo...

De eso se trató en el llamado Trienio Negro (2001-2004). Lo que se dirimió durante esos años, que pusieron al país al borde de una guerra civil, fue el control de unos recursos petrolíferos cada vez más abundantes –como consecuencia del incremento constante de la demanda global de crudo–. El paro petrolero de 2002-2003 marcó el punto álgido: fue a partir de entonces cuando el Gobierno comenzó a controlar realmente la compañía petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela PDVSA, y por ende, el poder.

El referéndum de 2004 rubricó el éxito de una estrategia encaminada a quebrar los círculos viciosos de la marginalidad mediante la incorporación –ante todo, pero no solamente– electoral de los excluidos. Para muestra, un botón: Caldera fue escogido –en 1993– con el voto de cerca de un 18% del total de los electores inscritos mientras que Chávez fue confirmado en su cargo –en 2004– con el apoyo de más de un 41% de los mismos.

Las tendencias censitarias quedaron, además, dismanteladas: la población electoral pasó, en solo diez años, de nueve a 14 millones –cerca de un 5% por encima del incremento demográfico–. Todo ello gracias a un arduo –y en el extranjero, generalmente incomprendido– trabajo simbólico y, por supuesto, a un gasto social desconocido, incluso entre sus propios partidarios: más de 5 mil millones de dólares, tan solo, en 2003 y 2004.

Dichas inversiones se destinaron a obra pública –vialidad, transporte y servicios básicos– pero sobre todo, a política social –atención médica primaria; servicios educativos y subvención de productos básicos– y a dos instrumentos fundamentales de la intuitiva política *chavista*: una redefinición –rural pero también, muy importante, urbana– de la propiedad de la

tierra y una política comunicativa encaminada a resaltar logros, incluso, fuera de Venezuela.

### Estructura de un riesgo

Desde que el *chavismo* asumió el control de la industria petrolera –en 2003– los resultados son espectaculares. El crecimiento económico aparenta ser, no en vano, incontenible: 17,9% en 2004 (uno de los más altos del mundo); 9,3% en 2005 y 7% en 2006. Casi el triple –por expresarlo en otros términos– que en los veinte años precedentes aunque, por supuesto, en un marco de duplicación de los precios internacionales del crudo (de 28 dólares en 2004 a 61 en 2006).

Independientemente de ello, la consecuencia más inmediata del superávit petrolero –y por supuesto, del control de cambio– es que el dinero circula como nunca lo había hecho desde finales de la década de 1970. Para los más viejos se trata de la –siempre esperada– reedición de la “Venezuela Saudita”; mientras que para los más jóvenes (casi una tercera parte del país ha nacido después de 1983), de una liberación con respecto al depresivo periodo anterior.

El gasto social está creciendo, efectivamente, de forma exponencial. Ocorre, sin embargo, que todavía nos estamos moviendo en cifras de crecimiento (superiores al 6%) que están dentro de los márgenes de lo considerado socialmente sustentable. De hecho, la solidez de las reformas fiscales emprendidas se pondrá a prueba cuando el crecimiento se ralentice: en países como Venezuela no basta con incrementar los impuestos “no petroleros”.

El otro elemento a considerar es la forma en la que se está gastando socialmente. Suele hacerse a través de unos fondos públicos alimentados por el superávit petrolero y ejecutados por un enjambre de

instituciones paralelas a las oficiales (las famosas “misiones sociales”, entre otras). Diga lo que diga la propaganda no se trata del escenario ideal: los derechos sociales, al no terminar de institucionalizarse, corren cierto riesgo de clientelización.

Existen indicios que, de hecho, apuntan a la (re)aparición de una práctica política —y no es un detalle menor— profundamente enraizada en la cultura política latinoamericana. El más importante tiene que ver con la dispersión institucional existente. En la Venezuela Bolivariana conviven, no en vano, al menos tres estructuras administrativas: el viejo aparato heredado de la IV República; el de nueva creación —más o menos *cubanizante*— y el popular.

El núcleo del sistema sigue teniendo dos pilares fundamentales: PDVSA y el ejército. La única diferencia es que, actualmente, la función política del Estado ha sido (re)estructurada al margen del mercado y la seguridad nacional, reinterpretada en clave social. Elemento novedoso: el liderazgo carismático de Chávez —claro exponente de las deficiencias institucionales— es el que ejerce de pulmón legitimador del régimen.

Por ahora no hay problema. Ocurre un poco como con el crecimiento económico superior al 6%: mientras que Chávez siga ganando elecciones por más de 25 puntos de diferencia no habrá riesgo pero ¿qué ocurrirá cuando el escenario cambie? Vistas las cosas desde ese punto de vista el clientelismo tiende, sin duda, a consolidar la (re)construcción del tejido social que está siendo lograda a partir de una política social expansiva.

Pero como demuestra la experiencia —no sólo de Venezuela, sino de otros países del entorno— nada es inamovible. Pese a los esfuerzos en sentido contrario (sobre todo, el que Anne Péné-Annette define como “laboratorio del Gran Este venezolano”) la dependencia que sigue existiendo de un bien fluctuante y no renovable

como el petróleo sigue siendo enorme y los déficits estructurales acumulados, difícilmente superables a corto plazo...

Todos estos factores aumentan la vulnerabilidad externa del país: Estados Unidos tiene actualmente prioridades geoestratégicas que, a priori, no pasan por América Latina. La nueva doctrina militar de Caracas se basa además —contra lo que se suele suponer— más en la intervención social del ejército y en la defensa asimétrica que en una carrera armamentística que pudiera comprometer, precisamente, el gasto social.

Pero Washington siempre piensa geopolíticamente: Venezuela no le preocupa mientras siga vendiendo petróleo; dificultando el lavado de dinero y ajena al conflicto colombiano. Lo que le inquieta es su nueva “diplomacia petrolera”, más multilateralista y menos alineada que antaño. Ahora, tras las elecciones, la Casa Blanca parece apostarle al pragmatismo. Pero Chávez no se relaja: sabe que la —aparente— solidez sigue teniendo bases muy frágiles...

*Juan Agulló es doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales —EHESS— de París, Francia. En la actualidad realiza una investigación posdoctoral para la EHESS y la Universidad Nacional Autónoma de México sobre ‘movilización social y cambio político en la Venezuela contemporánea’ (esturion@nodo50.org).*

**Marco Aurélio Nogueira**

## **O segundo governo de Lula: possibilidades e perspectivas**

O que podemos esperar do segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da